

Conflictos, desplazamiento y COVID-19

êçp escola de cultura de pau

Pamela Urrutia Arestizábal

Investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la UAB

Nº13 Octubre de 2021

Apunts ECP de
Conflictes i Pau

Resumen

En la última década los desplazamientos forzados de población a causa de conflictos armados, persecución y múltiples formas de violencia se han incrementado de manera exponencial. La crisis de la COVID-19 y las restricciones de movimiento impuestas para contener la expansión de la enfermedad impactaron en esta realidad, creando una situación sin precedentes e incidiendo especialmente en los movimientos transfronterizos. La pandemia ha exacerbado la vulnerabilidad de las personas desplazadas y refugiadas -y también migrantes-, que han tenido que lidiar con consecuencias desproporcionadas en el marco de una crisis múltiple: de protección, de salud y socioeconómica, entre otras dimensiones. La crisis de la COVID-19 también ha ofrecido lecciones, poniendo en evidencia la interdependencia del bienestar y la salud de los seres humanos, la urgencia de respuestas colectivas a los retos globales y la necesidad ineludible de poner en práctica vías legales y seguras para gestionar la movilidad humana desde un enfoque de derechos comprometido con la seguridad humana.

La pandemia de la COVID-19 ha tenido consecuencias multifacéticas y ha interactuado con otras crisis de alcance global, entre ellas la de desplazamiento forzado, agravando la situación de poblaciones ya en extremo vulnerables. La crisis del coronavirus y sus repercusiones en la movilidad humana a nivel mundial parecen haber ralentizado -aunque sin llegar a revertir- la tendencia de crecimiento sostenido en el número de personas refugiadas y desplazadas internas en la última década, que en 2020 volvió a batir un nuevo récord. Las consecuencias de la COVID-19 y de las restricciones impuestas para intentar frenar la pandemia se han observado de manera especial en las dificultades de acceso a protección y en

el aumento de los riesgos para las personas que huyen de contextos de conflicto y violencia. Las repercusiones también han sido relevantes en el ámbito de la salud y en la esfera socioeconómica, con impactos inmediatos en el día a día y consecuencias de largo plazo para las poblaciones desplazadas. Las formas en que las personas refugiadas y desplazadas han experimentado y afrontado la pandemia son diversas y complejas y requieren una mirada interseccional. No obstante, a nivel general y pese a las dificultades que persisten para recabar datos en numerosos contextos, las evidencias apuntan a una amplificación de las vulnerabilidades de las poblaciones desplazadas a causa del coronavirus. Este informe intenta perfilar la interrelación de la pandemia con el escenario de conflictos y desplazamiento forzado a nivel global; identificar algunos de sus principales impactos en las personas desplazadas, refugiadas y migrantes; y señalar algunas lecciones y retos de futuro desde la perspectiva de la movilidad humana.

Conflictos y desplazamiento: sin tregua pese a la COVID-19

El 23 de marzo de 2020, en la primera fase de la pandemia, el secretario general de Naciones Unidas hizo un llamamiento urgente a un cese del fuego de carácter global, con el fin de que todos los esfuerzos a nivel internacional pudieran focalizarse en la respuesta a la COVID-19 y garantizar el acceso a todas las poblaciones necesitadas de asistencia de salud y ayuda humanitaria. En su interpelación, António Guterres advertía de manera especial sobre los riesgos desproporcionados que podía suponer la pandemia para las poblaciones desplazadas forzosamente, subrayando que las personas refugiadas y desplazadas por conflictos violentos son “doblemente vulnerables”.¹

1. Antonio Guterres, *Secretary-General's Appeal for Global Ceasefire*, UN, 23 de marzo de 2020.

El llamamiento del secretario general de la ONU recibió el respaldo de numerosos actores internacionales, pero en la práctica tuvo un impacto desigual y limitado en los escenarios de hostilidades. Si bien se activaron treguas en algunos contextos, por lo general fueron acotadas y/o no sostenibles en el tiempo; mientras que en otros casos las partes en disputa aprovecharon el contexto de pandemia para avanzar sus objetivos militares e intensificar ataques y enfrentamientos.² A nivel general la pandemia no parece haber alterado de manera determinante los cálculos estratégicos de las partes contendientes, ni se erigió como una razón de peso para detener las hostilidades.³ A pesar de los severos impactos económicos de la pandemia, el contexto de la COVID-19 tampoco favoreció una disminución del gasto militar global –que en 2020 aumentó por quinto año consecutivo–; ni del comercio de armas –que se mantuvo en niveles similares a años previos.⁴ Paralelamente, los procesos y las negociaciones de paz también se vieron parcialmente afectados por los efectos del coronavirus, imponiendo obstáculos para la celebración de algunas rondas de negociación o dificultades para la implementación de acuerdos.⁵

Así, al finalizar 2020, el balance de conflictos armados a nivel mundial apuntaba a un incremento significativo de los casos graves o de alta intensidad –47% del total de conflictos armados–, contextos caracterizados por elevados índices de mortalidad y graves impactos en la seguridad humana, entre ellos masivos desplazamientos de población. Solo en el primer semestre del año los conflictos armados en países como Siria y RDC motivaron el desplazamiento forzado de tres millones de personas; mientras que en la segunda mitad del 2020 las hostilidades en contextos como Tigray, en Etiopía, o la disputa entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj, entre otros, generaron nuevas crisis de desplazamiento. 2020 se cerró así con un nuevo récord de personas desplazadas a nivel global: 82,4 millones (incluyendo 24,4 millones de personas refugiadas y 48 millones de desplazadas internamente).⁶ Esta cifra total supera la

En su llamamiento a un alto el fuego de alcance global, el secretario general de la ONU alertó sobre los riesgos desproporcionados de la pandemia para las poblaciones desplazadas forzosamente

del año anterior –79,5 millones en 2019– y duplica la registrada una década atrás –41 millones en 2010.⁷ Los números globales confirmaron la tendencia de incremento progresivo observada en los últimos diez años y que el fenómeno de desplazamiento forzado se mantiene en los peores niveles desde que existen registros. De hecho, la actual crisis es habitualmente caracterizada como la peor desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.⁸

La pandemia habría contribuido a una cierta ralentización de este fenómeno, ya que el incremento de población desplazada forzosamente sería menor de lo previsto. La fotografía global del impacto del coronavirus en los movimientos de personas aún es objeto de estudio, pero los datos de ACNUR apuntan a un descenso en el número de personas refugiadas y solicitantes de asilo: hasta 1,5 millones de personas menos respecto a las estimaciones proyectadas antes de la COVID-19.⁹ Las consecuencias en las personas que buscan refugio intentando cruzar fronteras internacionales son más evidentes, teniendo en cuenta los impactos de la pandemia en materia de restricciones de viaje, cierre de fronteras y bloqueo de los sistemas de asilo. En el primer semestre de 2020, en el momento más crítico de expansión de la pandemia, hasta 164 países sellaron sus fronteras, 99 de los cuales lo hicieron sin ningún tipo de excepción para las personas solicitantes de asilo. Así, las solicitudes de asilo cayeron en picado en 2020, mientras que las inscripciones en los registros de personas refugiadas de ACNUR también descendieron, ubicándose en el nivel más bajo desde 2012.¹⁰

Es importante resaltar que estas cifras a la baja no deben interpretarse como una reducción automática de los desplazamientos, sino más bien como indicador de un cambio de dinámicas ante los mayores obstáculos para los movimientos transfronterizos.¹¹ La situación de las personas desplazadas internamente es más compleja de perfilar, en parte, por las dificultades añadidas que las restricciones de la COVID-19 impusieron a la hora

2. Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2021, pp.25-26.

3. Richard Atwood, *A Year of COVID and Conflict: What the Pandemic Did and Didn't Do*, International Crisis Group (ICG), 2 de abril de 2021.

4. Stockholm International Peace Research (SIPRI), *World military spending rises to almost \$2 trillion in 2020, 26 de abril de 2021*, y SIPRI, *International arms transfers level off after years of sharp growth; Middle Eastern arms imports grow most, says SIPRI*, 15 de marzo de 2021.

5. Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2021.

6. ACNUR desglosa la cifra total de 82,4 millones de personas desplazadas forzosamente en: 26,4 millones de refugiadas (20,7 bajo el mandato de ACNUR y 5,7 palestinos y palestinas bajo el mandato de UNRWA), 48 millones de desplazadas internas, 4,1 millones de solicitantes de asilo y 3,9 millones de venezolanos y venezolanas desplazadas fuera de su país. UNCHR, *Global Trends. Forced Displacement in 2020*, junio de 2021, pp.2.

7. *Ibid*, pp.6.

8. Alex Braithwaite, Idean Salehyan, Burcu Savun, "Refugees, forced migration and conflict. Introduction to the special issue", *Journal of Peace Research*, Vol. 56(1) 5-11, 2019.

9. UNHCR (2021), *Global Trends*, op.cit, pp.5.

10. UNHCR (2021), *Global Trends*, op.cit. pp.58.

11. Meghan Benton et al. *COVID-19 and the State of Global Mobility in 2020*, Migration Policy Institute (MPI) e International Organization for Migration (IOM), Washington y Ginebra, abril de 2021, pp.24.

de acceder a estas poblaciones y recopilar información. A nivel general, estudios de centros de referencia como Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) apuntan a un aumento en los desplazamientos internos en 2020, siguiendo la tendencia de años previos, a pesar de que el temor a la pandemia habría desalentado algunos movimientos.¹² En algunos casos, sin embargo, la COVID-19 se convirtió en un nuevo factor detonante de desplazamiento para poblaciones en contextos de conflicto armado. Así, por ejemplo, en Yemen el temor al contagio y el deseo de trasladarse a zonas menos afectadas por la pandemia y/o que ofrecieran mayores posibilidades de acceso a servicios asistenciales y salud fueron identificados como una motivación crecientemente presente entre poblaciones desplazadas internamente. En algunos casos, se trataba de personas ya desplazadas y que huían por segunda, tercera o incluso cuarta vez, afectadas por una combinación de violencia, crisis económica y eventos medioambientales extremos atribuidos al cambio climático.¹³ Este caso ilustra y refuerza la necesidad de miradas que tengan en cuenta la complejidad y la confluencia de elementos en las realidades de desplazamiento, incluida su interrelación con fenómenos globales como la conflictividad armada, la emergencia climática y la COVID-19.¹⁴

Impactos multifacéticos de la pandemia en las personas desplazadas

A mediados de 2020 un tercio de población desplazada internamente en el mundo vivía en los 10 países con mayor prevalencia de COVID-19.¹⁵ Un año más tarde, en julio de 2021, los datos sobre las personas refugiadas a nivel global indicaban que un tercio de ellas se encontraba en los 20 países con las tasas más elevadas de coronavirus.¹⁶ Tal y como han reiterado diversas voces, “la pandemia ha convertido a las personas más

vulnerables en exponencialmente más vulnerables”.¹⁷ Las consecuencias para las poblaciones desplazadas internamente, refugiadas y migrantes han sido múltiples y interconectadas, dando lugar a lo que desde Naciones Unidas se ha descrito como una “triple crisis” por los impactos especialmente notorios en términos de protección, acceso a la salud y las repercusiones a nivel socioeconómico.¹⁸ A continuación se examinan estas tres dimensiones, introduciendo reflexiones desde una perspectiva de género.

Menos protección, más riesgos

Las restricciones de movilidad sin precedentes impuestas como estrategia para frenar la expansión de la pandemia redujeron abruptamente los flujos internacionales de personas a nivel general.¹⁹ Los movimientos transfronterizos de todo tipo disminuyeron de manera significativa, en especial en el primer semestre de 2020, coincidiendo con la política de cierre de fronteras y confinamientos impuestas por numerosos Estados. Así, por ejemplo, los meses de mayo y junio de 2020 registraron un 92% menos de pasajeros en vuelos internacionales en comparación con el mismo período del año anterior.²⁰ Paralelamente se constató una reducción significativa en las llegadas de personas migrantes en situación administrativa irregular a las fronteras externas de la Unión Europea, que registraron su nivel más bajo desde 2013.²¹ La pandemia amplió las diferencias entre las personas que, progresivamente, por su nacionalidad, recursos –y luego con el acceso a vacunas– pudieron recuperar y continuar con sus hábitos de movilidad y las que por sus necesidades y estatus vieron multiplicados los obstáculos para desplazarse, entre ellas personas trabajadoras migrantes y refugiadas.²²

Los derechos humanos y las necesidades de protección y ayuda específicas de las personas refugiadas y desplazadas internamente no siempre se tuvieron en cuenta –o no de una manera central– a la hora de adoptar medidas para afrontar la pandemia.²³ Tal y como ha

En 2020, año del estallido de la pandemia, se registró un descenso de un 45% de las solicitudes de asilo respecto al año anterior

12. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), *GRID 2021. Internal displacement in a changing climate*, 20 de mayo de 2021.

13. UNHCR (2021), *Global Trends*, op.cit. pp.56; International Organization for Migration (IOM), *Internal Displacement in Yemen Exceeds 100,000 in 2020 with COVID-19 as Emerging New Cause*, 21 de julio de 2020 (online); IDMC, *GRID 2021*, op.cit. pp. 43.

14. Para más información, véase María Villellas, “Conflictos, COVID-19 y cambio climático”, *Apunts ECP de Conflictos i Pau*, Nº 12 Julio de 2021.

15. António Guterres, “*The COVID-19 crisis is an opportunity to reimagine human mobility*”, UN Covid-19 Response, 3 de junio de 2020.

16. Migration Data Portal.

17. Ling San Lau et al., “COVID-19 in humanitarian settings and lessons learned from past epidemics”, *Nature Medicine*, 26, 647-648, 8 de abril de 2020.

18. UN, *COVID-19 and People on the Move*, Policy Brief, UN Sustainable Development Group, junio de 2020.

19. Según los datos recabados por Migration Data Portal, desde la declaración de la COVID-19 como pandemia por la OMS el 11 de marzo de 2020 y hasta el 12 de julio de 2021 se habían impuesto casi 110.000 restricciones de movimiento en todo el mundo. Migration Data Portal, *Migration data relevant for the COVID-19 pandemic*, 7 de septiembre de 2021.

20. Meghan Benton, op.cit., pp.1.

21. Ibid, Interpol, *COVID-19 impact on migrant smuggling and human trafficking*, 11 de junio de 2020; FRONTEX, *Irregular migration into EU last year lowest since 2013 due to COVID-19*, 08 de enero de 2021.

22. Ibid, pp. 3.

23. UN, *COVID-19 and People on the Move*, Policy Brief, UN Sustainable Development Group, junio de 2020.

subrayado ACNUR, las medidas destinadas a contener la expansión de la pandemia repercutieron de manera directa en el funcionamiento de los sistemas de asilo y las restricciones en los movimientos transfronterizos dificultaron –aún más– las posibilidades de acceso a protección internacional y a servicios esenciales. El acusado descenso en las solicitudes de asilo –45% menos en 2020 respecto a 2019– evidencia las dificultades para el ejercicio de este derecho por parte de personas necesitadas de huir de situaciones de conflicto, violencia y persecución. Solo en la UE, en los diez primeros meses de 2020 se identificó un descenso del 33% en las solicitudes de asilo respecto al mismo período del año anterior.²⁴

Sin posibilidades de cruzar fronteras y ante la persistencia de conflictos y situaciones de inseguridad, muchas personas quedaron atrapadas y más expuestas a situaciones de riesgo en países de origen o tránsito, algunas fueron detenidas o devueltas a sus áreas de origen pese a los múltiples riesgos, y otras se quedaron sin perspectivas de avanzar en procesos de reunificación familiar debido a la suspensión de procedimientos en este ámbito. Sin comida, alojamiento, acceso a servicios básicos o posibilidades de retornar a sus países de origen, algunas personas optaron por continuar su huida a través de mecanismos y rutas más peligrosas. Así, por ejemplo, tras un descenso temporal en la afluencia de las rutas marítimas para intentar alcanzar las costas europeas, se reactivaron los flujos migratorios por el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Ello, en un contexto en que las restricciones derivadas de la COVID-19 afectaron y condicionaron también las operaciones de búsqueda y rescate, muchas de ellas lideradas por ONG. Así, en el primer semestre de 2021 se había contabilizado la muerte de al menos 1.146 personas en las rutas marítimas de acceso a Europa, un incremento sustancial respecto al mismo período de 2020 (513) y 2019 (674).

Ya en los primeros meses de la pandemia, ACNUR advertía también sobre los riesgos asociados a que las personas obligadas a desplazarse estuvieran recurriendo cada vez más a contrabandistas y redes de tráfico de personas en su empeño por huir y acceder a algún tipo de protección.²⁵ Estudios focalizados en África,

Desde el principio de la pandemia, ACNUR advirtió sobre los riesgos asociados a que las personas obligadas a desplazarse estuvieran recurriendo cada vez más a contrabandistas y redes de tráfico de personas

Asia y Latinoamérica sobre rutas mixtas de migrantes y personas refugiadas confirmaron una demanda creciente de servicios de contrabandistas y traficantes desde el inicio de la COVID-19.²⁶ En algunos casos el temor al contagio de coronavirus habría sido un elemento relevante de estos movimientos. Así, por ejemplo, entre marzo y abril de 2020 se triplicaron los incidentes vinculados al tráfico de personas desde Bangladesh a Malasia que involucraban a población refugiada rohingya.²⁷ Expertos en migraciones y autoridades policiales alertaron sobre la mayor dependencia y riesgo de explotación por parte de contrabandistas, que adicionalmente elevaron sus tarifas y optaron por vías más arriesgadas y/o condiciones de viaje más peligrosas –embarcaciones más pequeñas, contenedores sellados en vehículos de carga, etc. En un contexto de informaciones cambiantes sobre las restricciones de movilidad motivadas por la pandemia, el uso de la información sobre las opciones de viaje y en algunos casos la utilización deliberada de la desinformación se convirtió en un elemento de poder y en una herramienta de presión por parte de las redes de tráfico de personas para convencer a grupos vulnerables sobre el uso de sus servicios.

El contexto de restricciones de movilidad activado a propósito de la COVID-19 también impuso obstáculos para valorar las vulneraciones a los derechos humanos de personas desplazadas. Así, por ejemplo, en Libia, la pandemia podría haber contribuido a agravar la situación de personas refugiadas y migrantes detenidas en centros de internamiento que han sido objeto de numerosas denuncias en los últimos años por ser escenario de torturas, abusos sexuales, extorsiones y trabajos forzados, entre otras prácticas. Organizaciones de derechos humanos alertaron que los abusos y el clima de impunidad podrían haber empeorado dada la disminución de las visitas e inspecciones a estos recintos por parte de ACNUR y otras agencias de Naciones Unidas.²⁸ Adicionalmente, el temor al contagio de la enfermedad intensificó las manifestaciones racistas, xenófobas y discriminatorias hacia poblaciones migrantes y refugiadas, perpetuando estigmas y derivando incluso en ataques directos. En muchos países, personas migrantes, refugiadas y desplazadas también han padecido exclusión o

24. European Commission, *Migration statistics Update: the impact of COVID-19*, 29 de enero de 2021.

25. UNHCR, *Mid-year Trends 2020*, 30 de noviembre de 2020; UNHCR, *UNHCR warns of increased COVID-19-related trafficking risks for refugees, displaced and stateless*, 30 de julio de 2020.

26. El 37% de las personas migrantes y refugiadas consultadas en un estudio llevado a cabo en julio de 2020 declararon una mayor necesidad de servicios de contrabandistas, porcentaje que se eleva a 44% y 46% entre las entrevistadas en África Occidental y América Latina. Mixed Migration Centre, *Impact of COVID-19 on migrant smuggling*, COVID-19 Global Thematic Update num.1, 1 de septiembre de 2020.

27. Interpol, *COVID-19 impact on migrant smuggling and human trafficking*, 11 de junio de 2020.

28. Hasta junio de 2021 se habían documentado 63 visitas y en 2020 se contabilizaron 264, mientras que en 2019 se produjeron 1351 inspecciones. Amnesty International, *Libya: 'No One Will Look for You': Forcibly Returned From Sea To Abusive Detention In Libya*, 15 de julio 2021; Kaamil Ahmed, "Violence towards refugees at Libyan detention centres forces MSF to pull out", *The Guardian*, 24 de junio 2021.

discriminación en los planes institucionales de respuesta a la pandemia en el ámbito de la salud y en los programas y medidas que han intentado paliar las severas consecuencias económicas de la pandemia.

Adicionalmente, cabe destacar que la pandemia ha tenido como efecto general una intensificación de las desigualdades y violencias de género,²⁹ un fenómeno que también ha tenido una manifestación específica en las poblaciones desplazadas de manera forzosa. Los estudios que han intentado documentar el tema son contundentes en sus resultados. En Afganistán un 97% de las mujeres desplazadas señalaron un aumento de la violencia por parte de sus parejas; mientras que otro estudio similar en Jordania arrojó un 69%. Siguiendo esta tendencia, una investigación en una quincena de países africanos identificó que el 73% de las mujeres desplazadas habían padecido un aumento de la violencia por parte de sus parejas en el contexto de pandemia.³⁰ Las restricciones de movilidad influyeron en las posibilidades de denunciar, solicitar ayuda o acceder a servicios de apoyo en estas circunstancias, sumado a otros condicionantes como el temor a ser deportadas en caso de no contar con documentación en regla, al estigma social y a represalias, o la vulnerabilidad y dependencia económicas. En paralelo, en muchos casos las mujeres y niñas en desplazadas forzosamente se vieron más expuestas a situaciones de violencia, abusos y explotación sexual (Véase Apunts número 11 sobre Conflictos, COVID-19 y la agenda de género, paz y seguridad)

Obstáculos en el acceso a la salud

Los impactos de la pandemia en la salud de poblaciones refugiadas y desplazadas se observaron en múltiples ámbitos –en especial en el acceso a la atención sanitaria y en las posibilidades de prevención–, agravando vulnerabilidades previas e incrementando el riesgo de exposición a la COVID-19 y/o de padecer algunas de las consecuencias más graves de la enfermedad. La inmensa mayoría de las personas refugiadas ha afrontado la pandemia en países con sistemas de salud con capacidades limitadas para dar respuesta a las complicaciones del coronavirus o abiertamente colapsados.³¹ Poblaciones desplazadas internamente en escenarios de conflictos armados

En Afganistán un 97% de las mujeres desplazadas señalaron un aumento de la violencia por parte de sus parejas en el contexto de pandemia

Poblaciones desplazadas internamente en escenarios de conflictos armados se encontraron lidiando con la enfermedad en países con infraestructuras hospitalarias al límite o mermadas severamente como consecuencia de las hostilidades

también se encontraron lidiando con la enfermedad en países con infraestructuras hospitalarias al límite o mermadas severamente como consecuencia de las hostilidades. En contextos como Yemen o Siria, la violencia y la destrucción deliberada de centros de salud por parte de los actores armados ya había favorecido la expansión de otras enfermedades como el cólera o la poliomielitis. Estos países contaban con recursos extremadamente limitados para responder a la nueva crisis derivada de la COVID-19. El acceso a la atención de salud también se vio condicionado por otros factores. Muchas personas refugiadas sin la documentación en regla –y también migrantes irregulares–; con temor a ser expulsadas, deportadas o detenidas; y/o con escasos recursos económicos “decidieron” no acudir a centros hospitalarios a pesar de estar contagiados o tener sospechas de haber contraído la enfermedad.³² El acceso a los servicios sanitarios también se ha visto limitado en muchos contextos por falta de información y barreras lingüísticas.

Las posibilidades de prevención de la enfermedad también se vieron mermadas por las condiciones de vida mayoritariamente precarias de poblaciones refugiadas y desplazadas, que dificultaron la adopción de algunas medidas más básicas para evitar el contagio del virus. Ya sea en campos específicos para personas refugiadas o desplazadas, en viviendas improvisadas, en ciudades de acogida o centros de internamiento, los espacios abarrotados, el hacinamiento y los problemas de saneamiento –incluyendo el acceso a agua y a productos de higiene– dificultaron aplicar medidas como la distancia social, el aislamiento de personas enfermas o el lavado frecuente de manos. A nivel de opinión pública esta problemática se hizo especialmente visible en septiembre de 2020, tras el incendio en el campo para personas refugiadas de Moria, en la isla griega de Lesbos, diseñado para albergar a menos de 3.000 personas, pero en el que malvivían más de 20.000. La situación en Moria se hizo aún más insostenible debido a las restricciones de movilidad a causa de la pandemia y el incendio no hizo más que exponer la extrema precariedad, las innumerables necesidades no atendidas, la imposibilidad de adoptar medidas de prevención ante la COVID-19 y otras enfermedades, y las responsabilidades europeas en la respuesta a la crisis.³³

29. Para más información sobre los impactos y la dimensión de género de la pandemia véase Ana Vilellas, “Conflictos, COVID-19 y la agenda de mujeres, paz y seguridad”, *Apunts ECP de Conflictos i Pau*, número 11, julio de 2021.

30. UNHCR (2021), *Global Report 2020*, pp.55.

31. UNHCR, *Mid-year trends 2020*, 30 de noviembre de 2020.

32. World Health Organization, *Apart Together Survey. Preliminary Overview of Refugees and Migrants Self-Reported Impact of COVID-19*, 18 de diciembre de 2020.

33. Patricia Simón, “Para que el infierno sea noticia tiene que arder”, *La Marea*, 10 de septiembre de 2020.

La falta de información desagregada sobre la salud de las personas migrantes y refugiadas dificulta valorar el alcance del impacto de la pandemia en este colectivo a nivel global. Pese a esta limitación, algunos estudios focalizados en las personas migrantes y desplazadas forzosamente han concluido que en algunos países estas poblaciones presentaban una mayor tasa de contagio en comparación con el resto de la población y enfrentaban un mayor riesgo de contraer la enfermedad debido a sus condiciones de vida, laborales y falta de acceso a los servicios de salud.³⁴ Análisis de la situación en países con niveles de ingreso altos apuntaron en esta dirección y también señalaron tasas más elevadas de letalidad por COVID-19 entre las personas migrantes.³⁵ En algunos casos, la alta prevalencia del coronavirus ha estado relacionada con el alojamiento de trabajadores migrantes en dormitorios comunes abarrotados y condiciones precarias. En Singapur, por ejemplo, a mediados de 2020 el 95% de los casos confirmados de COVID-19 correspondían a personas migrantes, de las cuales 93% tenía relación con dormitorios colectivos.³⁶

En lo que respecta a los programas de vacunación, el acceso de las poblaciones refugiadas a la inmunización se ha ido ampliando progresivamente, aunque aún persisten barreras y grupos pendientes de inclusión. Según los datos recabados por Naciones Unidas, la mayoría de países que acogen a poblaciones refugiadas había incorporado a este colectivo en sus planes de inmunización, pero a mediados de 2021 la vacunación efectiva de estas poblaciones solo había comenzado en poco más de la mitad de los países monitorizados. La ONU ha insistido en su llamado a eliminar los obstáculos para favorecer la vacunación, a menudo vinculados con la exigencia de documentación, la distancia de los centros de vacunación, la percepción de coste económico de la inmunización o la exigencia de registros por vía electrónica.³⁷ En casos como Bangladesh, ante el aumento de casos de COVID-19 las autoridades decidieron confinar cinco campos de personas refugiadas rohingyas en mayo de 2021. La campaña de vacunación había comenzado en febrero, pero no había alcanzado aún a la población refugiada.³⁸

La pandemia también ha tenido efectos en la salud mental de las personas refugiadas y desplazadas internamente.

El acceso de las poblaciones refugiadas a los programas de vacunación se ha ido ampliando progresivamente, aunque aún persisten barreras y grupos pendientes de inclusión

Un amplio estudio de la OMS sobre las afectaciones de la COVID-19 en las poblaciones migrantes y refugiadas constató que la mitad de las personas consultadas reconocían un aumento en las sensaciones de depresión y ansiedad como consecuencia de la pandemia.³⁹

Adicionalmente, el coronavirus también ha repercutido en los recursos destinados a la atención a otras enfermedades y en la disponibilidad de otros servicios de salud, entre ellos los relativos a la salud sexual y reproductiva, con repercusiones que afectan especialmente a mujeres y adolescentes.⁴⁰ El bienestar de mujeres y niñas en muchos contextos también se ha visto comprometido por la disponibilidad de materiales sanitarios y de higiene. Así, por ejemplo, en pleno confinamiento durante la primera fase de la pandemia, en el campo para personas refugiadas de Azraq, en Jordania, una de las principales preocupaciones –la segunda, después de la seguridad alimentaria– era la obtención de productos sanitarios y de higiene, incluyendo productos para la higiene menstrual.⁴¹ En el ámbito de la salud también cabe mencionar que a nivel global las mujeres representan la mayor parte de las personas que trabajan en el sector sanitario –incluyendo muchas mujeres migrantes, refugiadas y desplazadas– y, por tanto, se han visto más expuestas a la enfermedad. Además, habitualmente son las que asumen la mayor parte de carga de los cuidados no remunerados.

Consecuencias socioeconómicas

Los confinamientos y restricciones a la movilidad impuestos con motivo de la COVID-19 y las consecuencias en la actividad económica han tenido serios impactos de corto y largo plazo para las poblaciones desplazadas forzosamente, agravando situaciones de vulnerabilidad que preceden a la pandemia. Cabe recordar, por ejemplo, que el 85% de la población refugiada del mundo vivía en países en desarrollo, afectados ahora por las devastadoras consecuencias económicas de la COVID-19. Para las poblaciones desplazadas forzosamente uno de los impactos más inmediatos del cierre de fronteras a causa del coronavirus fueron las dificultades para la entrega de ayuda humanitaria. Un estudio del Norwegian Refugee Council (NRC) que consultó a más de 1.400

34. Migration Data Portal (2021), op.cit.

35. Frank Laczko, "COVID-19 and migration in 2020: Five key trends", *Migration Policy Practice*, Vol. XI, Número 1, enero - febrero de 2021; *OECD, What is the impact of the COVID-19 pandemic on immigrants and their children?*, 19 de octubre de 2020.

36. Migration Data Portal (2021), op.cit.

37. UNHCR, *UNHCR calls on states to remove barriers to access to COVID-19 vaccines for refugees*, 24 de junio de 2021.

38. Al Jazeera, "Bangladesh puts Rohingya camps under lockdown after COVID Spike", *Al Jazeera*, 21 de mayo de 2021.

39. WHO (2020), op.cit.

40. Para más información, véase Ana Vilellas, "Conflictos, COVID-19 y la agenda de mujeres, paz y seguridad", *Apunts ECP de Conflictos i Pau* N°11, julio de 2021.

41. CARE, *Impact of COVID-19 on Vulnerable Populations in Jordan Urban Areas and Azraq Camp*, Rapid Needs Assessment, 1 de abril de 2020; Devon Cone, *Gender Matters: COVID-19's Outsized Impact on Displaced Women and Girls*, *Issue Brief, Refugees International*, 7 de mayo de 2020.

personas afectadas por conflictos y desplazamiento en ocho países –Afganistán, Colombia, Iraq, Kenia, Libia, Malí, Uganda y Venezuela– concluyó que un 28% había recibido menos asistencia humanitaria que en el período previo a la pandemia.⁴² Ante los problemas de acceso, en algunos casos la entrega de bienes y la provisión de servicios a poblaciones desplazadas, por ejemplo en países como Iraq o Nigeria, se limitaron estrictamente a los ámbitos más urgentes.⁴³ Según los datos recabados por ACNUR, en áreas como Norte de África y Oriente Medio las organizaciones que trabajan con personas refugiadas y desplazadas recibieron más de 350.000 llamadas durante las cinco primeras semanas de confinamiento por parte de personas que necesitaban ayuda económica urgente para satisfacer sus necesidades más básicas.⁴⁴

La vulnerabilidad económica de las personas refugiadas y desplazadas –y también en muchos casos de la población migrante– se debe a que por las desigualdades económicas y sociales a las que hacen frente y, en numerosas ocasiones, por la falta de un estatus legal, muchas de ellas se desempeñan en actividades de la economía informal. Este tipo de actividades se han visto más afectadas por los confinamientos, ofrecen menos posibilidades de desempeñar tareas a distancia y suponen la ausencia de opciones –o muy limitadas– de acceder a beneficios de protección social. Aunque no pretenden ser concluyentes u ofrecer conclusiones generalizables, diferentes estudios sobre los impactos socioeconómicos de la COVID-19 en personas desplazadas coinciden en diagnosticar una importante pérdida de ingresos a causa de la pandemia con las consiguientes repercusiones en sus estándares de vida. El ya citado estudio de NRC concluyó que el 77% de las personas consultadas habían perdido su empleo o ingresos de manera temporal o permanente desde marzo de 2020, es decir, a partir del estallido de la pandemia. Según esta misma investigación, los ingresos de las familias desplazadas también se vieron afectados por la disminución en los flujos de remesas –el 62% percibía menos ayuda económica de familiares en el exterior en comparación con el período previo a la pandemia– y forzó a muchas de ellas a tener que recurrir a préstamos para sobrevivir –el 30% se vio obligada a pedir más dinero que antes de la expansión de la COVID para poder pagar necesidades de alimentación, alquiler o educación.

Diferentes estudios sobre los impactos socioeconómicos de la COVID-19 en personas desplazadas han identificado una importante pérdida de ingresos a causa de la pandemia con las consiguientes repercusiones en sus estándares de vida

Otro estudio del Banco Mundial y el Joint Data Center on Forced Displacement (JDC) de ACNUR focalizado en siete países –tres de los cuales coinciden con los de la investigación de NRC (Iraq, Kenia y Uganda) junto a Bangladesh, Djibouti, Etiopía y Yemen– arrojó conclusiones similares en lo referente a reducción de fuentes de ingresos, pérdida de empleos, disminución de remesas y necesidad de pedir préstamos. Este estudio constató además que los niveles de desempleo eran más altos entre la población desplazada que entre la población receptora en prácticamente todos los países analizados.⁴⁵ El análisis del Banco Mundial y el JDC también coincidió con el NRC a la hora de identificar serias repercusiones en el ámbito de la seguridad alimentaria. Ante el nuevo contexto creado por el coronavirus, muchas familias desplazadas se vieron forzadas a disminuir el consumo de alimentos, con las previsibles consecuencias de largo plazo. El 70% de las personas encuestadas en el estudio del NRC reconocieron haber tenido que reducir el número de comidas al día desde el estallido de la pandemia. Análisis de casos confirman este diagnóstico, entre otros el de la población refugiada rohingya y bengalí desplazada, que reconocía dificultades para conseguir dos comidas al día tras la pandemia.⁴⁶ La COVID-19, por tanto, ha agravado la situación de las poblaciones refugiadas y desplazadas internas, más aún si se tiene en cuenta que la mayor parte de ellas vive en países que antes de la pandemia ya presentaban altos niveles de inseguridad alimentaria.

Los problemas de acceso a servicios esenciales han tenido repercusiones específicas y desproporcionadas en los menores en situación de desplazamiento, con impactos especialmente patentes en ámbitos como la educación. Los niños y las niñas representan en torno a un tercio de la población global, pero constituyen un 42% de la población desplazada a nivel mundial y desde antes de la pandemia tenían mayores posibilidades de exclusión de los sistemas educativos. Los datos sobre menores migrantes o desplazados son escasos, pero la información disponible sobre los niños y las niñas refugiadas indica que la probabilidad de no estar escolarizados es cinco veces mayor en comparación con otros menores. Según datos de UNICEF, sólo el 50% cursa educación primaria y menos del 25% accede a educación secundaria.⁴⁷ La

42. Daniel Gorevan, *Downward Spiral: the economic impact of Covid-19 on refugees and displaced people*, Norwegian Refugee Council, septiembre de 2020.

43. UN, *Covid-19 and the People on the Move*, Policy Brief, junio 2020, pp.10.

44. *Ibid*, pp.13.

45. UNHCR (2021), *Global Trends*, op.cit. pp.60-61.

46. UNHCR, *COVID-19's impact on Rohingya and Bangladeshi adolescents in Cox's Bazar*, 21 de diciembre de 2020.

47. UNICEF, *Education Uprooted. For every migrant, refugee and displaced child, education*, septiembre de 2017, pp.5.

COVID-19 comprometió el acceso a la educación a nivel global a una escala inédita, afectando a más de 1.500 millones de estudiantes,⁴⁸ pero impactó de manera especial a los y las menores migrantes, desplazados y refugiados. Tras recabar datos en 159 países, UNICEF constató una exclusión significativa de estos menores de las medidas de protección social puestas en marcha por los respectivos gobiernos y concluyó que en más de la mitad de los casos (58%) no existían alternativas adecuadas de aprendizaje a distancia para niños y niñas de colectivos vulnerables, incluyendo poblaciones migrantes, desplazadas y refugiadas.⁴⁹ La falta de acceso a internet, ordenadores, televisión e incluso a electricidad repercutieron así en las posibilidades de continuar con los estudios por vía remota a corto plazo y, a largo plazo, se temía que esos menores no pudieran retomar los estudios debido a las situaciones económicas de sus familias.⁵⁰ Según estimaciones de la ONG Save the Children, los niños y las niñas refugiadas representan el 40% de los 9,7 millones de menores que probablemente no retornarán a la escuela tras la pandemia.⁵¹

La precarización de las poblaciones desplazadas también ha aumentado el riesgo de abusos y explotación de menores. En esta línea, se ha alertado sobre situaciones de trabajo infantil, explotación sexual y sobre los matrimonios precoces, un fenómeno que en términos generales afecta de manera desproporcionada a las niñas. Algunos estudios han identificado una mayor prevalencia de trabajo infantil y bodas de niñas entre la población refugiada siria, que se habría intensificado en el contexto de la COVID-19.⁵² El recurso a los matrimonios infantiles ha sido identificado como un mecanismo para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia en países como Siria, Iraq o Yemen, todos contextos de conflicto armado con altos niveles de desplazamiento forzado.⁵³

Lecciones y retos de la COVID-19

La crisis de la COVID-19 ha vuelto a dejar en evidencia la necesidad de una respuesta colectiva a los retos globales, desde la conciencia de las responsabilidades compartidas

y de la interrelación del bienestar y la salud de los seres humanos. Este mensaje se ha reiterado desde entes multilaterales como Naciones Unidas, en especial en lo que respecta al acceso a pruebas diagnósticas, vacunas y tratamientos; la no discriminación en las políticas estatales de control del coronavirus; y la importancia de no dejar atrás a colectivos vulnerables, incluyendo las personas desplazadas. “Nadie estará seguro hasta que todas las personas estemos seguras”, han repetido diversos representantes de Naciones Unidas, ACNUR, OIM y la OMS, entre otras organizaciones, subrayando que la enfermedad no distingue por nacionalidades o estatus legal.

En el ámbito específico de las migraciones y desplazamientos de población, el contexto creado por la pandemia ha sido señalado como una oportunidad para repensar y reimaginar la movilidad de las personas.

La precarización de las poblaciones desplazadas forzosamente también ha aumentado el riesgo de abusos y explotación de menores en el contexto de pandemia

Diversas voces han subrayado la urgencia de poner en el centro la dignidad humana para garantizar flujos más seguros e inclusivos durante y después de la pandemia y han enfatizado que la COVID-19 no debía erosionar –aún más– el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el acceso a protección de acuerdo con las leyes internacionales de derechos humanos y las normas que garantizan el derecho de asilo. En esta línea, se ha destacado que cobra aún más sentido y relevancia la puesta en práctica efectiva del acuerdo internacional para la gobernanza de la movilidad humana, el *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*, el acuerdo sobre personas refugiadas *Global Compact on Refugees*, y contribuir así también a los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en particular al compromiso de no dejar a nadie atrás.⁵⁴

En este contexto, también se ha intentado poner en valor las políticas de algunos países que han intentado conjugar medidas de control de la pandemia y el cumplimiento del derecho internacional humanitario, las leyes internacionales de derechos humanos y los principios de protección del derecho de asilo. ACNUR ha destacado en positivo esfuerzos de países como Uganda, que en plena pandemia acogió a miles de personas refugiadas de la RDC aplicando protocolos de control

48. Según datos disponibles, en abril de 2020 un total de 188 países habían impuesto un cierre total de los centros escolares a causa de la pandemia, afectando a una población en torno a 1.500 millones de estudiantes en todo el mundo. UN, *Policy Brief on the Impact of COVID-19 on Children*, abril de 2020, pp.2.

49. UNICEF, *COVID-19 has led to dramatic reduction in essential services and protection for migrant and displaced children in countries around the world*, Press Release, 18 de diciembre de 2020.

50. NRC, op.cit, pp.21.

51. UNHCR, *COVID-19 crisis underlines need for refugee solidarity and inclusion*, 7 de octubre de 2020.

52. UN, *Policy Brief* (junio 2020), op.cit. pp.14

53. Secretario general de la ONU. *Violencia Sexual relacionada con los conflictos*, S/2021/312, 30 de marzo de 2021.

54. IOM, “The COVID-19 pandemic is an opportunity to reimagine human mobility”, *Statement by the United Nations Network on Migration*, 2 de junio de 2020; ESCWA, UNCHR, ILO, *The impact of COVID-19 on Migrants and Refugees in the Arab Region*, E/ESCWA/CL2.GPID/2020/Policy Brief 2, diciembre de 2020.

de la enfermedad. La agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas ha subrayado que en más de un centenar de países se adaptaron las modalidades de acceso a los procedimientos de asilo, favoreciendo vías digitales y registros a distancia por vía telefónica, correo electrónico o postal.⁵⁵ En pleno auge de la pandemia también se identificaron como “buenas prácticas” las medidas adoptadas por más de una veintena de países para ampliar la duración de visados y evitar así situaciones de irregularidad.⁵⁶ Uno de los casos destacados fue el de Portugal, donde todas las personas extranjeras con expedientes pendientes de resolución recibieron estatus de residencia permanente desde el 30 de marzo hasta el 1 de julio con el fin de que pudieran acceder a la atención de salud y otros servicios públicos durante la pandemia.⁵⁷

Si bien estos ejemplos se han destacado en clave positiva, voces expertas han subrayado la importancia de ir más allá de las políticas ad-hoc, temporales y de corto plazo, apostando por la implementación efectiva de vías legales y seguras para regular los movimientos de personas. Unos flujos que no se detendrán pese a las restricciones –como ha quedado patente– ni siquiera en un contexto de pandemia, menos aún en el caso de las personas que se desplazan forzosamente y para quienes está en juego la supervivencia de ellas y sus familias. Esta necesidad urgente de vías legales y seguras y de mecanismos de regularización para personas migrantes y refugiadas ya se había identificado y

Tras la pandemia, voces expertas han subrayado la importancia de ir más allá de las políticas ad-hoc y de corto plazo, y apostar por la implementación efectiva de vías legales y seguras para regular los movimientos de personas

reclamado desde antes de la emergencia de la COVID-19, pero la crisis del coronavirus hizo evidente su importancia también por los riesgos, tanto para las personas en movimiento como para las sociedades receptoras, por una cuestión de salud pública.⁵⁸

La crisis de la COVID-19 también permitió visibilizar –al menos durante un tiempo– que sectores cruciales como la agricultura, el transporte, los cuidados y el ámbito de la salud son ámbitos laborales con alta participación de personas migrantes y refugiadas. A nivel global, según datos de la ONU, aproximadamente una de cada ocho enfermeras trabaja en un país diferente del que nació.⁵⁹ No obstante, su situación en esos ámbitos es con frecuencia de desprotección y explotación laboral, unido a las desigualdades que afrontan en sus otros ámbitos de vida (acceso a vivienda, regularización administrativa, recursos, etc.).

El reconocimiento público de su aportación en la gestión de la pandemia debería ir acompañado no solo de la desarticulación de los discursos y narrativas discriminatorias y xenófobas, sino también de políticas que favorezcan vías regulares para sus desplazamientos y garanticen los estándares internacionales de derechos humanos. Lo que está en juego es un cambio de perspectiva y paradigma que conduzca a un cambio efectivo y a una verdadera priorización de los derechos humanos y de la seguridad humana en la gobernanza de la movilidad global.

55. UNHCR (2020), *Midyear report*, op.cit, pp.7

56. IOM, *COVID-19 Analytical Snapshot #13: Irregularity, protection & smuggling*, 14 de abril de 2020.

57. Reuters, “Portugal to treat migrants as residents during coronavirus crisis”, *Reuters*, 28 de marzo de 2020.

58. Luisa Feline Freier, *COVID-19 and rethinking the need for legal pathways to mobility: Taking human security seriously*. International Organization for Migration (IOM), Ginebra, agosto de 2020.

59. Antonio Guterres (2020), op.cit.



Esta publicación está sujeta a una licencia de Creative Commons. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja la opinión de la ACCD ni de la Generalitat de Catalunya.



Escola de Cultura de Pau
Parc de Recerca, Edifici MRA,
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Espanya)
+34 93 586 88 42
pr.conflictes.escolapau@uab.cat
escolapau.uab.cat

Con el apoyo:



@escolapau
EscolaPau